



## INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA CELEBRACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA EL “ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE ADOLESCENTES ATENDIDOS CON CARGO A LA DIRECCION GENERAL DE INFANCIA, FAMILIAS Y NATALIDAD”.

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), la necesidad de celebración de este Acuerdo Marco se justifica atendiendo a las siguientes consideraciones:

- **Marco normativo.**

El presente Acuerdo Marco se rige por la siguiente normativa, que justifica la competencia que ejerce este centro directivo para el cumplimiento de su objeto:

- **La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor**, encomienda la tutela, guarda y acogimiento de menores a la Entidad Pública que en el respectivo territorio tenga a su cargo la protección de menores, habiéndose atribuido, en el caso de la Comunidad de Madrid, dichas funciones a la Consejería de Integración Social (en la actualidad Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad) mediante Decreto 49/88, del Consejo de Gobierno de dicha Comunidad.

Esta Ley Orgánica, así como la **Ley 6/1995, de Garantías de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en la Comunidad de Madrid**, destacan como principio rector de la actuación de los poderes públicos **la supremacía del interés del menor**. La segunda de las leyes mencionadas establece en sus artículos 56 y 63 que la tutela y la guarda podrán ejercerse por la Administración mediante la atención a los menores en centros residenciales. Por su parte, el artículo 66 contempla el derecho de los menores residentes en Centros Residenciales a acceder a los servicios necesarios para atender todas las necesidades que demanda el adecuado desarrollo de su personalidad y que no sean satisfechas por el propio Centro.

- **La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de Julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia**, desarrolla y refuerza el derecho del menor a que su interés superior sea prioritario, dotando de contenido al citado concepto.
- **La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia**, tiene como objeto introducir los cambios necesarios en la legislación española de protección a la infancia y la adolescencia, que permitan continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio nacional, introduciendo una mejora en los instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del artículo 39 de la Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y ,en especial, de los menores de edad.



Por su parte, el artículo primero, apartado nueve, se refiere a los supuestos de “Atención Inmediata” estableciendo que “las autoridades y servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar traslado en otro caso, al órgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la Entidad Pública y del Ministerio Fiscal.

Hemos de tener en cuenta, por tanto, que, atendiendo a la legislación internacional y nacional, no existe la posibilidad de establecer listas de espera para este perfil concreto de población, debiéndose garantizar su atención inmediata.

- **La Ley 2/1996 de 24 de junio, por la que se creó el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMFM)**, encomienda a este Organismo ejercer las competencias que a la Comunidad de Madrid le corresponden en materia de protección de menores. Con la extinción del IMFM por Decreto 72/2015, de 7 de julio, en virtud del cual se modificó la estructura orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, se estableció que las competencias del Instituto fueran asumidas por la Dirección General de la Familia y el Menor.
- **La Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid**, modificada por la Ley 8/2009, de 21 de diciembre.
- **La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid**, que determina los sectores de infancia y juventud marginada como tributarios de atención por los Servicios Sociales, a fin de prestarles la adecuada protección previniendo su marginación, fomentando su participación social y favoreciendo su incorporación a la sociedad mediante actuaciones normalizadoras e integradoras. Ello de conformidad con los principios que el art. 3 de dicho texto legal señala como inspiradores de los Servicios Sociales y de entre los que cabe destacar el de responsabilidad pública y el de colaboración de la iniciativa privada.
- **El Estatuto de las Residencias de Atención a la Infancia y la Adolescencia, aprobado por Decreto 88/1998, de 21 de mayo**, exige a las Residencias el desarrollo de las funciones de educación, y cuidado y promoción de la salud de los residentes (artículo 5), debiendo programar y desarrollar la vida cotidiana del Centro, diseñar, realizar y evaluar periódicamente el Proyecto Individual de cada menor, dar a los cuidados y atenciones a las necesidades básicas de los niños un profundo sentido educativo y afectivo (artículo 6), y facilitar la reincorporación familiar del menor o, en los casos en que ésta resulte imposible, promover la alternativa familiar más adecuada.

A su vez, el Estatuto determina, en su artículo 3, la tipología de recursos residenciales en función de la población a la que atienden y las características de su proyecto. Entre ellos, se encuentran los hogares, en los que se encuadrarían los recursos residenciales objeto de este Acuerdo Marco.



- Decreto 279/2019, de 29 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.

- **Contrato precedente.**

Mediante Resolución, de 17 de diciembre de 2014, del Director-Gerente del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (actualmente, Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, en adelante DGFIN) se adjudicó el contrato denominado “Acogimiento residencial de menores, atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (89 plazas)”. De estas 89 plazas, 8 resultaron desiertas por resultar el número de plazas adjudicadas a los licitadores admitidos a este procedimiento abierto menor que las plazas ofertadas. Desde el inicio de este contrato hasta la actualidad, el nivel de ocupación medio de los pisos específicos de adolescentes ha ido aumentando, llegando en numerosas ocasiones al 100% de ocupación. Lo mismo puede decirse del nivel de ocupación en los Centros de Primera Acogida.

Estos contratos tenían una duración inicial de 3 años, a partir del 1 de enero de 2015 y podían ser objeto de prórroga por un período de igual duración, por lo que finalizan su vigencia el día 31 de diciembre de 2020, por ello, se requiere licitar un nuevo procedimiento para dar cobertura a las 81 plazas existentes

Teniendo en cuenta, por tanto, la normativa vigente y la actual situación de demanda de atención a menores adolescentes con medida de protección, donde resulta imprescindible ofrecer un acogimiento residencial que dé respuesta a esta necesidad social, en virtud de lo establecido en las normas citadas, y que la DGIFN no puede prestar con sus propios medios este Servicio, se hace necesario recurrir a la contratación de plazas ofertadas por empresas o entidades que desarrollen una actividad análoga a lo que constituye el objeto del contrato, y que proporcione las condiciones adecuadas para dar cobertura a las necesidades de los menores durante su periodo de permanencia en los recursos residenciales, al objeto de dar cumplimiento a las funciones que esta Dirección General tiene encomendadas.

La tendencia antes señalada, en cuanto a la situación de demanda de atención a menores adolescentes con medida de protección, lleva a concluir sobre la necesidad de **aumentar el número de plazas en recursos de esta última tipología**, garantizando la homogeneización de las condiciones, a fin de asegurar la igualdad en la prestación a los usuarios y la optimización del sistema desde el punto de vista administrativo, por ello se considera que la figura del Acuerdo Marco como instrumento de racionalización técnica de la contratación es la adecuada para canalizar la contratación de las plazas precisas.

Se considera, asimismo, que el sistema de contratos basados en el Acuerdo Marco economiza la gestión administrativa, gracias a la unificación en un procedimiento de los trámites necesarios, pudiendo disponer de forma inmediata de una bolsa de licitadores y logrando una contratación más ágil y eficiente. Se trataría, por tanto, de establecer condiciones idénticas para una misma prestación, dando a todas las plazas disponibles el mismo tratamiento en cuanto a la contratación, seguimiento de los contratos, precios y condiciones.



Por otra parte, y con el objetivo de favorecer la concurrencia de empresas e incrementar la eficiencia en el uso de los recursos propios, resulta conveniente la licitación pública de la totalidad de las plazas existentes en la Red de centros de protección en la modalidad de pisos tutelados para adolescentes (incluyendo aquellas plazas que en el transcurso de la vigencia de los anteriores contratos han desaparecido; aquellas otras que, por diversas circunstancias, no se incluyeron en los mismos u otras que, con posterioridad, han sido concertadas o conveniadas).

**En conclusión, el Acuerdo Marco tiene importantes ventajas, frente al sistema de contratación que se realizaba anteriormente** (concursos periódicos con un número limitado de plazas), para la contratación de plazas de Acogimiento Residencial. En concreto, las siguientes:

1) **Respecto a la prestación del servicio.**

- **Continuidad de los proyectos educativos de intervención** que se desarrollan en la actualidad. El nuevo Acuerdo Marco, y sus contratos basados pueden garantizar la continuidad de los proyectos individuales desarrollados con los menores, favoreciendo, a su vez, la continuidad de la utilización de los recursos escolares, culturales, etc., usados por estos y la permanencia de sus figuras adultas de referencia, cuestión ésta significativa si tenemos en cuenta los problemas vinculares característicos de la infancia protegida. De igual forma, se favorece la continuidad de Proyectos de Centro de contrastada eficacia.
- **Estabilidad.** El Acuerdo Marco garantiza en el plazo de su duración, dos años, prorrogable por otros dos, el mantenimiento de dichas plazas por lo que proporciona estabilidad a la Red de Centros de Protección de la Comunidad de Madrid.

2) **Respecto al procedimiento de contratación.**

- **Homogeneidad.** Se trata de establecer un marco único de actuación para las entidades que prestan servicio en atención residencial para adolescentes, en el ámbito contractual, por lo que se trata de incluir en este Acuerdo Marco las plazas incluidas en los contratos cuya vigencia finaliza y un número adicional de plazas resultante de la pérdida de las mismas en los años anteriores y teniendo en cuenta la evolución del aumento de menores adolescentes con perfiles complejos.
- **Simplificación y agilización del procedimiento de licitación y adjudicación de los contratos.** Durante el desarrollo del Acuerdo Marco, la contratación se realiza de forma simplificada y sin necesidad de someterlos a nueva licitación y sin tener que realizar prórrogas anuales de los contratos actuales sujetas a disponibilidad presupuestaria.

3) **Respecto al presupuesto de licitación.**

- El presupuesto de licitación del Acuerdo Marco **tiene su base en los precios de contratos realizados recientemente para plazas de acogimiento residencial de menores** con medida de protección y en diversos estudios realizados al efecto.



- Se considera que **el presupuesto de licitación de la plaza ocupada/día está equilibrado** respecto al precio real de mercado de las plazas de acogimiento residencial, lo que permitirá obtener una homogeneización de las ofertas presentadas por los licitadores.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la LCSP, se propone la tramitación de un Acuerdo Marco para el Acogimiento Residencial de 120 menores, en la modalidad de Pisos tutelados (Orden 613/1990, de 6 de noviembre de la Consejería de Integración Social), de edades comprendidas entre 13 y 17 años (hasta el día inmediatamente anterior al cumplimiento de los 18 años), atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, los próximos cuatro años.

En Madrid, a la fecha de la firma

LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA FAMILIAS  
Y NATALIDAD

Fdo: Ana Sastre Campo

